Presupuestos contra el déficit

LA VANGUARDIA, Editorial, 25.09.10

EL firme compromiso del Gobierno de reducir el déficit público hasta el 6% del producto interior bruto (PIB) el año próximo, frente al 9,3% actual, es un intento de lanzar un mensaje de rigor y confianza en la economía española. Y así lo transmitió ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, al dar cuenta de la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para el 2011.

La reducción del déficit público comporta austeridad y sacrificio para amplios colectivos de la sociedad. Probablemente se podría haber hecho mejor, pero llegados a esta situación, al presidente Zapatero no le quedaba más remedio que adoptar unas medidas que, en su mayor parte, resultan inevitables.

Los presupuestos para el 2011, según explicó la vicepresidenta Salgado, suponen una reducción del gasto global del 3% y se equiparan a los de hace cuatro años. El gasto de los ministerios disminuye en un 16%. Es un tijeretazo notable, necesario para compensar el aumento de la deuda pública y del coste de su financiación. El endeudamiento del Estado, como consecuencia del déficit acumulado en el último año, pasa del 62,80% del PIB al 68,70%. Es una cifra todavía veinte puntos inferior a la media de la UE, pero con un riesgo de incremento que hacía improrrogable el ajuste actual.

El sacrificio del recorte se reparte fundamentalmente entre los funcionarios y los pensionistas. Los salarios de los primeros se estabilizarán en el nivel que tengan tras el descenso aplicado este año.

Las pensiones se congelarán en el 2011, después de la revalorización que se les aplique a primeros de enero. Las mínimas subirán un 1%. Todo ello supone un enorme ahorro, que se complementa con la drástica disminución de las inversiones públicas. Estas medidas no son sostenibles, por lo que cara a los próximos años será clave afrontar una completa reforma de la estructura administrativa del Estado.

El proyecto de presupuestos suprime la desgravación por compra de vivienda, y suspende la ampliación del permiso de paternidad. Desde la vertiente de los ingresos, exige más aportación fiscal a quienes más ganan. Así, se castiga a los trabajadores con mayores ingresos, que tributarán entre uno y dos puntos más por el IRPF, en un gesto pensado sobre todo con fines propagandísticos, que permita vender al Gobierno que se exige también un sacrificio a las rentas más altas.

El Ejecutivo espera que su proyecto de presupuestos permita un crecimiento de la economía del 1,3%, pero confiesa que apenas propiciará la creación de empleo, ya que se espera acabar el 2011 con una tasa de paro del 19,3%, unas décimas por encima de lo previsto hasta ahora. El gran defecto de estos presupuestos es que no incluyen ninguna medida de fomento de la actividad productiva, salvo la exención de tributación por ampliación de capital en las pequeñas y medianas empresas. Sería conveniente apostar por otras medidas, como la exención de los beneficios reinvertidos, o algunos apoyos a la exportación, para impulsar la creación de empleo.

Pese a todo, el firme compromiso de reducción del déficit que suponen los presupuestos, junto con el apoyo parlamentario del PNV al Gobierno

para su aprobación, ofrece un escenario de estabilidad económica y política que debería contribuir a la mejora de la confianza en el país.